

EDL 1957/54 Mº de Justicia

Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
BOE 160/1957, de 20 de junio de 1957

ÍNDICE

Artículo Único	4
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa	4
TÍTULO PRIMERO. PRINCIPIOS GENERALES	4
CAPÍTULO ÚNICO	4
Artículo	
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	
TÍTULO II. PROCEDIMIENTO GENERAL	5
CAPÍTULO PRIMERO. DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPROPIACIÓN FORZOSA	5
Artículo	
10, 11, 12, 13, 14	
CAPÍTULO II. LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS BIENES O DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS	6
Artículo	
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	
CAPÍTULO III. DE LA DETERMINACIÓN DEL JUSTO PRECIO	8
SECCIÓN PRIMERA. De la determinación por mutuo acuerdo	8
Artículo	
25, 26, 27	
SECCIÓN SEGUNDA. Del expediente ordinario para la determinación del justo precio	9
Artículo	
28, 29, 30, 31	
SECCIÓN TERCERA. Del Jurado de Expropiación	9
Artículo	
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38	
SECCIÓN CUARTA. De la valoración	11
Artículo	
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	
CAPÍTULO IV. DEL PAGO Y TOMA DE POSESIÓN	12
SECCIÓN PRIMERA. Del pago	12
Artículo	
48, 49, 50, 51	
SECCIÓN SEGUNDA. De la toma de posesión	13
Artículo	
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59	
SECCIÓN TERCERA. De la inscripción en los registros	14
Artículo	
60, 61, 62	
SECCIÓN CUARTA. Reversión de bienes y derechos expropiados	15
Artículo	
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70	
CAPÍTULO V. RESPONSABILIDAD POR DEMORA	16
Artículo	
71, 72, 73, 74	
TÍTULO III. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES	17
CAPÍTULO PRIMERO. DE LA EXPROPIACIÓN POR ZONAS O GRUPOS DE BIENES	17
Artículo	
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86	
CAPÍTULO II. DE LA EXPROPIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD	8
Artículo	
87, 88, 89, 90, 91	
CAPÍTULO III. DE LA EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES DE VALOR ARTÍSTICO, HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO	8
.....	19
SECCIÓN PRIMERA. De la expropiación en general	19
Artículo	
92, 93, 94, 95, 96	
SECCIÓN SEGUNDA. De los derechos de tanteo y retracto	19

Artículo	
97 , 98 , 99 , 100	
CAPÍTULO IV. DE LA EXPROPIACIÓN POR ENTIDADES LOCALES O POR RAZÓN DE URBANISMO	20
Artículo	
101 , 102 , 103	
CAPÍTULO V. DE LA EXPROPIACIÓN QUE DÉ LUGAR A TRASLADO DE POBLACIONES	20
Artículo	
104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118	
CAPÍTULO VI. DE LAS EXPROPIACIONES POR CAUSA DE COLONIZACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS	22
SECCIÓN PRIMERA. De las expropiaciones por causa de colonización	22
Artículo 119	22
SECCIÓN SEGUNDA. De las expropiaciones por causa de obras públicas	22
Artículo 120	22
CAPÍTULO VII. DE LA EXPROPIACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	22
Artículo 123	22
CAPÍTULO VIII. DE LA EXPROPIACIÓN POR RAZONES DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD DEL ESTADO	22
Artículo 124	22
TÍTULO IV. INDEMNIZACIÓN POR OCUPACIONES TEMPORAL Y OTROS DAÑOS	22
CAPÍTULO PRIMERO. INDEMNIZACIÓN POR OCUPACIÓN TEMPORAL	22
Artículo	
125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132	
TÍTULO V. GARANTÍAS JURISDICCIONALES	24
Artículo	
139 , 140 , 141	
DISPOSICIONES FINALES	24
Disposición Final	
Primera , Segunda	

FICHA TÉCNICA

Vigencia

Vigencia desde:10-7-1957

Versión de texto vigente Desde 05/05/1993

Documentos anteriores afectados por la presente disposición

Legislación

Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999. Ordenación de la Edificación

Conforme dde.2

Documentos posteriores que afectan a la presente disposición

Legislación

En relación con art.1 Ley 3/1976 de 11 marzo 1976

Delegada determinadas atribuciones contenidas en por art.9 O de 30 mayo 1990

art.51apa.2

Dada nueva redacción por art.un D 1780/1967 de 13 julio 1967

art.51apa.3

Dada nueva redacción por art.un D 1780/1967 de 13 julio 1967

art.64

Declarada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Acordada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

art.65

Declarada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Acordada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

art.66

Declarada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Acordada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

art.67

Declarada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Acordada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

art.68

Declarada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Acordada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

art.69

Declarada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Acordada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

art.70

Declarada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Acordada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

art.121

Derogada por Ley 11/1986 de 20 marzo 1986

art.122

Derogada por Ley 11/1986 de 20 marzo 1986

tit.4cap.2

Derogada por dde.un RD 429/1993 de 26 marzo 1993

art.133

Derogada por dde.un RD 429/1993 de 26 marzo 1993

art.134

Derogada por dde.un RD 429/1993 de 26 marzo 1993

art.135

Derogada por dde.un RD 429/1993 de 26 marzo 1993

art.136

Derogada por dde.un RD 429/1993 de 26 marzo 1993

art.137

Derogada por dde.un RD 429/1993 de 26 marzo 1993

art.138

Derogada por dde.un RD 429/1993 de 26 marzo 1993

Versión de texto vigente Desde 05/05/1993

Última reforma de la presente disposición realizada por Ley 38/1999 de 5 noviembre, de Ordenación de la Edificación EDL 1999/63355

La Ley de Expropiación Forzosa, aprobada el dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, determinó en su disposición final segunda, la publicación del Reglamento general para el desarrollo de las normas sustantivas y de su adecuada aplicación

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo Único

Se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, de fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, que a continuación se inserta.

Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa

TÍTULO PRIMERO. PRINCIPIOS GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1

1. Toda la intervención administrativa que implique privación singular de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos, a que se refiere el art. 1 de la ley, es una expropiación forzosa a todos los efectos, y específicamente, a los de exigencia de habilitación legal, de sometimiento a procedimiento formal y de garantía jurisdiccional frente a la misma.

2. La enumeración de los supuestos de privación singular de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos que hace el art. 1 de la ley, tiene carácter enunciativo y no excluye la posibilidad de otros distintos, a los fines de la calificación del párrafo anterior.

3. En las excepciones del párr. 2º art.1 de la ley, se comprenden las relativas a ventas forzosas de cualquier artículo objeto de intervención económica.

Artículo 2

Las expropiaciones de facultades parciales del dominio o de derechos o intereses legítimos que, no habiendo sido reguladas por los títs. III y IV de la ley, estén autorizadas por normas con rango de ley, se regirán:

1º) Por tales disposiciones especiales, en cuanto a la extensión, procedimiento y, en su caso, normas de valoración.

2º) Por la ley general y por este reglamento, preceptivamente, en cuanto a garantías jurisdiccionales, intervención del jurado de expropiación, responsabilidad por demora y reversión.

3º) Subsidiariamente, cuando se apliquen las normas especiales referidas en el número primero, por las disposiciones generales de la ley y de este reglamento.

Artículo 3

1. A los efectos del presente reglamento, se entiende por expropiante el titular de la potestad expropiatoria; por beneficiario, el sujeto que representa el interés público o social para cuya realización está autorizado a instar de la Administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria, y que adquiere el bien o derecho expropiados, y por expropiado, al propietario o titular de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, o titular del derecho objeto de la expropiación.

2. El Estado, la Provincia y el Municipio, dentro de sus respectivas competencias, son los únicos titulares de la potestad de expropiar.

3. El Estado ejercita esta potestad por medio de sus órganos competentes en cada caso. Corresponde al gobernador civil la representación ordinaria del Estado en los expedientes expropiatorios^[1], salvo en los casos en que la ley, este reglamento o norma especial con rango de decreto hayan establecido la competencia de autoridad distinta.

4. Cuando expropie la Provincia o el Municipio, corresponde, respectivamente, a la Diputación provincial o al Ayuntamiento en pleno, adoptar los acuerdos en materia de expropiación que conforme a la ley o a este reglamento tengan carácter de recurribles en vía administrativa o contenciosa. En los demás casos, la representación de estas entidades corresponde al presidente de la Diputación y al alcalde, sin perjuicio de la competencia del gobernador civil en el supuesto regulado por el art. 18 de la ley general. Estos principios no serán de aplicación en cuanto las normas de régimen local o de urbanismo, a que se refiere el art. 85 de la ley, establezcan criterios especiales de competencia.

Artículo 4

Cuando no concurren en el mismo sujeto las cualidades de expropiante y beneficiario, al titular de la potestad expropiatoria corresponderá ejercerla en favor del beneficiario, a instancia del mismo; decidir ejecutoriamente en cuanto a la procedencia y extensión de las obligaciones del beneficiario respecto al expropiado y adoptar todas las demás resoluciones que impliquen ejercicio de dicha potestad, sin perjuicio de la intervención, facultades y obligaciones que al beneficiario atribuye el artículo siguiente.

Artículo 5

1. Corresponderá a las personas o entidades que ostenten la condición de beneficiarios de la expropiación forzosa solicitar de la respectiva Administración expropiante la iniciación del expediente expropiatorio en su favor, para lo que deberán justificar plenamente la procedencia legal de la expropiación y su cualidad de beneficiarios, pudiendo la Administración expropiante pedirles cuantas justificaciones estime pertinentes y efectuar por sus propios medios las comprobaciones necesarias.

[1] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

2. En el curso del expediente tendrán atribuidas los beneficiarios las siguientes facultades y obligaciones:

1º) Como parte en el expediente expropiatorio, impulsar el procedimiento e informar a su arbitrio sobre las incidencias y pronunciamientos del mismo.

2º) Formular la relación a que se refiere el art. 17 de la ley.

3º) Convenir libremente con el expropiado la adquisición amistosa a que se refiere el art. 24 de la ley.

4º) Actuar en la pieza separada de justiprecio, a los efectos de presentar la hoja de aprecio a que se refiere el art. 30 de la ley, y de aceptar o rechazar la valoración propuesta por los propietarios.

5º) Pagar o consignar, en su caso, la cantidad fijada como justo precio.

6º) Abonar las indemnizaciones de demora que legalmente procedan por retrasos que le sean imputables.

7º) Las obligaciones y derechos derivados de la reversión.

8º) Los demás derechos y obligaciones establecidos en la ley y en este reglamento.

Artículo 6

1. La determinación de la persona o entidad a la que conviene el carácter de expropiado en los expedientes expropiatorios se ajustará a lo dispuesto en los arts. 3 a 7 de la ley.

2. Los titulares de derechos o intereses sobre el bien expropiado, salvo los arrendatarios rústicos o urbanos, no percibirán indemnización independiente, sin perjuicio de que puedan hacerlos valer sobre el precio derivado de la expropiación principal.

Artículo 7

Para que, conforme al art. 7 de la ley, se opere formalmente en el expediente expropiatorio la subrogación del adquirente de un bien o derecho en curso de expropiación, deberá ponerse en conocimiento de la Administración el hecho de la transmisión y el nombre y domicilio del nuevo titular. A estos efectos únicamente serán tomadas en consideración las transmisiones judiciales, las inter vivos que consten en documento público y las mortis causa respecto de los herederos o legatarios.

Artículo 8

1. Conforme al art.8 de la ley, la expropiación extingue todas las cargas y derechos anteriores sobre el bien expropiado, que se convierten, por ministerio de la ley, en derechos sobre el justo precio, con la salvedad consignada en el art. 6 de este reglamento.

2. Cuando no exista acuerdo en la distribución del justo precio entre los distintos titulares de derechos o intereses, la Administración procederá a consignar la cantidad total en la Caja General de Depósitos hasta que se resuelvan las discrepancias entre los mismos.

Artículo 9

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podrá conservarse algún derecho sobre el bien expropiado, siempre que resultase compatible con el fin a que tal bien haya de quedar afectado como consecuencia de la expropiación.

2. Corresponde a la Administración la decisión sobre la subsistencia del derecho, debiendo oír previamente al titular expropiado principal y al del derecho cuya continuación se propone. Su valoración es de la competencia del jurado con arreglo a las normas generales.

3. Las reglas de este artículo no serán de aplicación en los casos en que directamente se promueva una expropiación parcial de facultades limitadas al dominio o de derechos, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el art. 2 de este reglamento.

TÍTULO II. PROCEDIMIENTO GENERAL

CAPÍTULO PRIMERO. DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA EXPROPIACIÓN FORZOSA

Artículo 10

La declaración de utilidad pública e interés social a que se refiere el art. 9 de la ley llevará consigo la autorización para expropiar los bienes o derechos necesarios para la realización de las obras o el establecimiento de los servicios.

Artículo 11

1. Si los bienes objeto de la expropiación fueren inmuebles, la declaración de utilidad pública deberá hacerse mediante ley aprobada en Cortes.

2. No será necesario la promulgación de una ley formal, en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de obras y servicios comprendidos en los planes del Estado, Provincia o Municipio aprobados con los requisitos legales, en los que se entenderá implícita aquella declaración. La realización concreta de los planes del Estado deberá ser acordada por orden ministerial y los de la Provincia o Municipio, por los organismos competentes.

b) Cuando por ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública para categorías o clases determinadas de obras, servicios o concesiones, bastará el reconocimiento de la utilidad pública en cada caso concreto, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, salvo que las leyes que las regulen hubieran dispuesto otra cosa.

c) Cuando en las disposiciones especiales que regulen las expropiaciones a que se refieren los arts. 85 y 97 de la ley se establezca forma distinta en cuanto a la declaración de utilidad pública.

Artículo 12

1. El interés social como causa legitimadora de la expropiación deberá ser declarado expresa y singularmente mediante ley en cada caso.

2. No obstante, cuando en virtud de ley se hubiere declarado genéricamente el interés social de categorías o clases determinadas de obras, servicios o concesiones, a los fines específicos del art. 31 Fuero de los Españoles, aquella declaración llevará implícita la facultad expropiatoria y bastará el decreto acordado en Consejo de Ministros para su aplicación en cada caso concreto.

3. Asimismo, se entenderá que existe causa de interés social a los efectos expropiatorios y, por tanto, no será necesario el requisito de su previa declaración formal en los supuestos previstos en los arts. 71 y 72 de la ley.

Artículo 13

Si la expropiación afectare a bienes muebles, la utilidad pública o interés social deberá declararse expresa y concretamente en cada caso, mediante ley, salvo que en otra se haya autorizado la expropiación para una categoría o clase especial de bienes, en cuyo supuesto bastará decreto acordado en Consejo de Ministros.

Artículo 14

La declaración de industria de interés nacional llevará aneja, sin otro requisito, la de la utilidad pública de las obras o servicios necesarios para el emplazamiento, instalación o ampliación de la misma, en los términos y con las condiciones que establece la Ley 24 octubre 1939.

CAPÍTULO II. LA NECESIDAD DE OCUPACIÓN DE LOS BIENES O DE ADQUISICIÓN DE DERECHOS

Artículo 15

1. La declaración de utilidad pública o interés social, de un fin, obra o servicio, autoriza a la Administración para resolver sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que resulten estrictamente indispensables para la realización de aquéllos ajustándose al procedimiento que se establece en el presente capítulo.

2. Si la ocupación hubiere de extenderse a bienes que puedan resultar indispensables para previsibles ampliaciones, se entenderá que los mismos quedan afectos al fin, obra o servicio determinantes de la expropiación, sin que puedan ser calificados de partes sobrantes a los efectos del art. 54 de la ley.

Artículo 16

1. La Administración expropiante o el beneficiario de la expropiación, en su caso, a través de aquélla, deberá formular una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos cuya ocupación o disposición se consideren necesarias, así como, si procediere, de los imprescindibles para las ampliaciones de la obra, servicio o finalidad determinante de la expropiación. Se exceptúan de este trámite los proyectos aprobados reglamentariamente, cuando los mismos comprendieran la descripción material de los bienes o derechos necesarios.

2. En la relación se expresará el estado material y jurídico de cada uno de los bienes o derechos, los nombres de los propietarios o de sus representantes, con indicación de su residencia y domicilio, y los de cuantos sean titulares de algún derecho o interés indemnizable, afectados a la expropiación.

3. Cuando la ejecución de la obra o servicio requiera la comprobación previa de los bienes que hayan de resultar afectados por la ocupación, la relación se formulará una vez realizadas las operaciones que permitan la individualización concreta de las cosas o derechos necesarios, así como la de sus titulares, según lo dispuesto en el párrafo anterior.

4. En este último caso, las autoridades gubernativas, como las entidades y particulares afectados, deberán prestar su colaboración y permitir las operaciones de replanteo y comprobación que los técnicos de la Administración consideren convenientes realizar.

Artículo 17

1. La Administración expropiante, a través del gobernador civil o de la autoridad competente en cada caso^[2], hará pública la relación de los bienes y derechos, para que dentro de un plazo de quince días, contados a partir de la última de las publicaciones a que se refiere el párrafo siguiente, puedan los interesados formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal.

[2] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

2. A los expresados efectos, cuando las expropiaciones sean realizadas por el Estado, la relación de los bienes y derechos de necesaria ocupación o disposición deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado, en el de la Provincia o provincias respectivas y en uno de los diarios de mayor circulación en éstas, si los hubiere. Igualmente, se remitirá copia de la relación a los Ayuntamientos en cuyo término radiquen las cosas objeto de la expropiación, para que la fijen en el tablón de anuncios.

Artículo 18

1. Los titulares de derechos afectados por la expropiación podrán, durante el transcurso del plazo fijado en el artículo anterior, aportar cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores que se estimen cometidos en la relación que se hubiere hecho pública.

2. En los casos de oposición a la ocupación o a la disposición de los bienes o derechos, por motivos de forma o de fondo, deberán señalarse los fundamentos de la misma y los razonamientos que puedan aconsejar la estimación como preferentes y convenientes al fin de la expropiación de otros bienes y derechos no figurados en la relación publicada.

3. A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona natural o jurídica, podrá comparecer ante la alcaldía, gobierno civil u organismo competente para alegar y ofrecer cuantos antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que procedan.

Artículo 19

1. Al finalizar el plazo de alegaciones, se abrirá otro de veinte días en el que se cumplirán los siguientes trámites:

a) Examen y calificación de los fundamentos de la oposición a la necesidad de la ocupación de los bienes o derechos afectados por la relación hecha pública.

b) Rectificación y complemento de los datos que, sobre la titularidad de los bienes o derechos, y sus características materiales o legales, procediere como resultado de las alegaciones de los particulares comparecientes.

c) Incorporación al expediente, cuando hubiere lugar, de certificaciones u otros documentos de comprobación que, al efecto, se extienden por los Registros de la Propiedad, Fiscales u otras dependencias públicas.

2. Cumplidos los trámites a que se refiere el párrafo anterior, y dentro del plazo fijado en el mismo, se resolverá, previo informe de la Abogacía del Estado, sobre la necesidad de la ocupación, debiendo relacionarse detalladamente en el acuerdo los bienes y derechos afectados, así como los titulares de los mismos con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites del expediente.

3. La condición de interesados, sólo se reconocerá a las personas definidas en los arts. 3 y 4 de la ley y 6 y 7 de este reglamento.

Artículo 20

1. El acuerdo de necesidad de ocupación, que será publicado y notificado a los expropiados, inicia el expediente expropiatorio.

2. La publicación de dicho acuerdo tendrá lugar en igual forma que la establecida en el art. 17 para el trámite de información pública.

3. La notificación individual será preceptiva respecto de los expropiados, en la parte exclusiva que pueda afectarles, y podrá realizarse en las formas siguientes:

a) Por entrega al interesado o a su representante, en su domicilio, por agente público, del traslado de la resolución administrativa; si no fuere hallado, se hará la notificación al familiar, empleado o sirviente, mayor de edad, que se encontrare en el domicilio del destinatario de la notificación, o a un vecino, a presencia y firma, en uno y otro caso, de otros dos vecinos.

b) Por el servicio de correos en la modalidad denominada de certificado con acuse de recibo.

4. En los casos de indeterminación o desconocimiento de los titulares o de sus domicilios, la notificación habrá de realizarse simultáneamente por edictos en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en cuyo término radiquen los bienes.

5. La notificación individual, en cualquiera de las formas enumeradas, deberá contener el texto íntegro de la resolución a que se refiere y especificar los recursos que, en su caso, procedan contra la misma autoridad u organismo ante que hayan de formularse y plazo concedido para su interposición.

6. La omisión o error en la notificación de cualquiera de los requisitos expresados producirá su nulidad, salvo que el particular interesado hubiera utilizado en tiempo y forma los recursos procedentes.

7. Los particulares afectados por la resolución administrativa que acuerde la necesidad de la ocupación de bienes o derechos, podrán deducir los recursos que estimen procedentes, aunque no fueran de los expresados en la notificación.

Artículo 21

1. El acuerdo de necesidad de ocupación podrá impugnarse mediante recurso de alzada ante el titular del departamento al que pertenezca la competencia de la obra, fin o servicio determinante de la expropiación.

2. El recurso podrán deducirlo los interesados en el respectivo procedimiento expropiatorio y cuantos hubieren comparecido en el trámite anterior de información pública.

3. El plazo para la interposición del recurso será de diez días, contado a partir de la fecha de notificación del acuerdo.
4. El recurso habrá de resolverse en el plazo de veinte días.
5. La interposición del recurso de alzada producirá efectos suspensivos en tanto no se notifique su resolución, que habrá de ser expresa en todo caso.
6. El procedimiento continuará su tramitación en cuanto se refiera a los bienes o derechos cuyos titulares no hubieren deducido el recurso de alzada contra el acuerdo de la necesidad de ocupación.

Artículo 22

1. En los casos en que la finalidad de la expropiación sólo requiera la necesidad de ocupación de parte de una finca rústica o urbana de tal modo que, a consecuencia de la misma, resulte antieconómico para el propietario la conservación de la parte de la finca no afectada, podrá el titular interesado solicitar de la Administración que la expropiación comprenda su totalidad.

2. En la solicitud deberán exponerse las causas concretas determinantes de los perjuicios económicos, tanto por la alteración de las condiciones fundamentales de la finca, como de sus posibilidades de aprovechamiento rentable.

3. El gobernador civil o la autoridad competente^[3], en su caso, resolverá la solicitud en el plazo de diez días.

4. La resolución podrá impugnarse mediante recurso de alzada, que se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior.

5. Contra la resolución ministerial no se dará el recurso contencioso-administrativo, pero se estará a lo dispuesto en el art. 46 de la ley en cuanto se refiera a la valoración de los perjuicios derivados de la expropiación parcial.

Artículo 23

1. En las ocupaciones y expropiaciones de bienes de la Iglesia Católica se estará a lo dispuesto en el artículo XXII del vigente concordato. A tal fin, además de aplicarse el procedimiento regulado en este reglamento, el Jurado de Expropiación antes de resolver definitivamente sobre el justiprecio, dará audiencia por plazo de ocho días a la autoridad eclesiástica, manifestando la cuantía de la indemnización que se propone fijar.

2. Cuando la Iglesia fuere beneficiaria de la expropiación con arreglo a lo previsto en el art. 2 de la ley, se aplicará el procedimiento regulado en este título y tendrá en el mismo las facultades previstas en el art. 5.

Artículo 24

1. Las normas del presente capítulo sobre publicación de edictos en los Boletines Oficiales y tablón de anuncios de los Ayuntamientos; anuncios en periódicos; notificaciones; plazos y su cómputo, que será siempre de días hábiles y a contar desde el siguiente al de notificación o publicación y las que se refieren a interposición, trámite y resolución de recursos, serán observadas y aplicadas en las distintas actuaciones a que se refiere este reglamento, salvo que expresamente se disponga lo contrario.

2. Los periódicos diarios en que se inserten los edictos o anuncios a que se refiere la ley y este reglamento, percibirán solamente el 50 por 100 del importe de las tarifas oficiales aprobadas por la Dirección General de Prensa.

CAPÍTULO III. DE LA DETERMINACIÓN DEL JUSTO PRECIO

SECCIÓN PRIMERA. De la determinación por mutuo acuerdo

Artículo 25

Una vez reconocida formalmente la necesidad de ocupación, la adquisición por mutuo acuerdo con cargo a fondos públicos se ajustará a los trámites siguientes:

a) Propuesta de la jefatura del servicio encargado de la expropiación, en la que se concrete el acuerdo a que se ha llegado con el propietario, con remisión de los antecedentes y características que permitan apreciar el valor del bien objeto de la expropiación.

b) Informe de los servicios técnicos correspondientes en relación con el valor del bien objeto de la expropiación.

c) Fiscalización del gasto por la Intervención.

d) Acuerdo del Ministro o, en su caso, del órgano competente de la corporación local o entidad respectiva.

Artículo 26

El acuerdo de adquisición se entenderá como partida alzada por todos conceptos, y el pago del precio, libre de toda clase de gastos e impuestos, a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la ley, sin que proceda el pago del premio de afección a que se refiere el art. 47.

Artículo 27

[3] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

1. Transcurridos quince días sin resolver acerca de la adquisición por mutuo acuerdo, se iniciará el expediente ordinario a que se refieren los artículos siguientes. A tal fin, los beneficiarios de la expropiación propondrán al gobernador civil de la provincia o autoridad competente^[4], en su caso, la iniciación del expediente de justiprecio, remitiéndole las actuaciones a que se refiere el párr. 1º art. 29.

2. Sin embargo, la fijación del precio por mutuo acuerdo puede verificarse en cualquier momento del expediente hasta que el Jurado de Expropiación decida acerca del justo precio y, producido el mutuo acuerdo, quedarán sin efecto las actuaciones que se hubieran verificado, relativas a la determinación del mismo.

SECCIÓN SEGUNDA. Del expediente ordinario para la determinación del justo precio

Artículo 28

El expediente de justiprecio a que se refiere el capítulo III de la ley se entenderá iniciado, a todos los efectos legales, el día siguiente a aquel en que haya adquirido firmeza el acuerdo declaratorio de la necesidad de la ocupación, con independencia de la fecha en que la Administración expropiante extienda la correspondiente diligencia de apertura. En consecuencia, a continuación de la misma, se fijarán por la Administración la fecha legal de iniciación del expediente, a la que deberán referirse todas las tasaciones de los bienes o derechos expropiados, con arreglo a lo ordenado por el párr. 1º art. 36 de la ley.

Artículo 29

1. La pieza separada a que se refiere el art. 26 de la ley, se iniciará con un extracto de las actuaciones practicadas para la fijación por mutuo acuerdo del precio de adquisición, así como el resultado del mismo.

2. A continuación figurará la descripción exacta del bien concreto que haya de expropiarse, a tenor de lo dispuesto, en el art. 26 de la ley. Esta descripción deberá ser idéntica a la contenida en el acuerdo de necesidad de ocupación.

Artículo 30

A los efectos del art. 29 de la ley, y al requerir la Administración a los propietarios para que presenten su hoja de aprecio deberán darles traslado igualmente de la fecha legal de iniciación del expediente de justiprecio, pudiendo aquéllos, al presentarle, discutir la procedencia de adoptar la expresada fecha, razonando, en su caso, la fijación de otra.

Artículo 31

Los peritos de que trata el núm.2 art. 29 de la ley habrán de tener título profesional expedido por el Estado, de acuerdo con la especialidad de la materia sobre que hayan de dictaminar. Todos ellos deberán haber ejercido su profesión por espacio de un año con anterioridad a la fecha en que sean requeridos por el particular para la confección de la hoja de aprecio. Si el nombramiento no reuniera estas condiciones, la Administración la admitirá si estuviese firmada exclusivamente por el propietario.

SECCIÓN TERCERA. Del Jurado de Expropiación

Artículo 32

1. Cuando los bienes objeto de la expropiación fueren distintos de los enumerados en el apartado b) art. 32 de la ley, será vocal del Jurado de Expropiación el ingeniero industrial designado por la respectiva delegación de Industria, si se tratare de instalaciones industriales, y, en los demás casos, aquel funcionario técnico más idóneo, a juicio de la entidad expropiante.

2. A los efectos de lo dispuesto en el art. 33 de la ley, apartado 3º, los miembros de los Jurados de Expropiación serán incompatibles con la defensa o el asesoramiento de los particulares en los expedientes de expropiación. Los funcionarios a que se refieren los apartados, a), b) y d) art. 32 de la ley no podrán prestar servicio en las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias o en la CNS.

3. Aparte de estas incompatibilidades de carácter general, los miembros del Jurado de expropiación deberán abstenerse de intervenir en las valoraciones cuando el expediente sometido al mismo afecte a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con aquéllos, o cuando tengan algún derecho o interés sobre los bienes objeto de expropiación.

4. En el supuesto previsto en el párrafo anterior, se procederá a su sustitución, bien de oficio o a instancia de parte, con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 33

1. Las causas de abstención señaladas en el párr. 3º del artículo anterior, lo serán de recusación, pudiendo ser alegadas por el expropiado o el beneficiario. El escrito de recusación habrá de presentarse por quien sea parte en el expediente de expropiación, debidamente razonado y con expresión de la causa en que se ampare.

2. Si el miembro a que se refiera encuentra justificada la misma, y el Jurado lo aprobara, se tendrá por recusado sin más trámites. La adopción de tal acuerdo se tomará por el jurado constituido por los demás miembros y el suplente del presunto recusado.

3. Cuando el afectado no estimara justificada la causa, se tramitará en pieza separada el incidente, al que se podrán aportar cuantos datos y pruebas conduzcan a su justa resolución. Paralelamente se proseguirá el expediente de justiprecio, que no podrá resolverse antes que el incidente de recusación, suspendiéndose a tal fin cuando llegue el momento de su resolución por el jurado.

[4] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

4. El Jurado, constituido con el suplente o suplentes de los presuntos recusados, tramitará el expediente de justiprecio y fallará el incidente de recusación, pudiendo ordenar la práctica de cuantas pruebas estime convenientes a tal fin. El incidente deberá resolverse en el plazo de veinte días.

5. Cuando se dé lugar a la recusación, se tendrá por definitivamente separado del expediente principal al miembro a que afecte, no pudiéndose interponer recurso alguno.

6. Cuando se declare no haber lugar a la misma, continuará conociendo del expediente principal. Tal acuerdo será impugnabile conjuntamente con el que fije el justiprecio en vía contencioso-administrativa, y será resuelto por esta jurisdicción con carácter previo, debiendo anularse el acuerdo de justiprecio cuando se dé la causa de recusación y no se obtenga el quórum exigido para la constitución del Jurado y la adopción del mismo sin el voto del miembro afectado, retrotrayendo las actuaciones a dicho momento procesal.

Artículo 34

1. En los casos previstos en el art. 32 y en los de imposibilidad física o material de asistencia de cualquiera de los miembros del Jurado de Expropiación, el presidente procederá a su sustitución. A estos efectos, los vocales mencionados en el art. 32 de la ley, deberán tener designado, por el mismo procedimiento que para su nombramiento se determina en el citado precepto, un vocal sustituto. En consecuencia, la falta de asistencia será suplida mediante la sustitución, quedando prohibida la representación de un vocal ausente por otro presente.

2. El presidente de la Audiencia, al designar el magistrado presidente del Jurado, procederá al nombramiento de un suplente, cargo que deberá recaer igualmente en un magistrado de la Audiencia respectiva.

Artículo 35

Los vocales comprendidos en el apartado c) art. 32 de la ley se considerarán funcionarios públicos en cuanto afecte al desempeño de su función en el Jurado de Expropiación.

Artículo 36

1. La ausencia injustificada a las sesiones del Jurado de Expropiación se reputará falta leve para los funcionarios del mismo cuando no sea reiterada; grave, en caso de reiteración, corregida con apercibimiento, y muy grave, si la ausencia implicase abandono del servicio. En todo caso, el funcionario que estuviere inhabilitado física, legal o materialmente para la asistencia a cualquier sesión deberá hacerlo saber así al presidente del jurado o al de la Audiencia, en su caso, con la suficiente antelación a fin de que se proceda a la citación del sustituto.

2. La revelación de datos que los miembros del jurado de expropiación conozcan por razón de su cargo se considerará falta leve cuando se trate de indiscreción manifiesta, pero irrelevante y no repetida, que no produzca daño al servicio o las personas; graves, cuando existe reincidencia o produzca evidente perjuicio a los particulares o a la Administración o entrañe riesgo notorio para el prestigio de la función o el interés público, y muy grave, cuando fuese evidente el daño al servicio público o al prestigio de la función, sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda.

3. En lo previsto en los párrafos anteriores se aplicarán los preceptos de la Ley y del Reglamento de Funcionarios Públicos relativos al régimen disciplinario.

Artículo 37

1. Corresponderá al presidente del Jurado imponer la sanción de apercibimiento, de lo que, en su caso, dará cuenta al Ministerio del que dependa el vocal.

2. En los demás casos, el presidente pondrá los hechos en conocimiento de dicho Ministerio, a efectos de la instrucción del expediente disciplinario, sin perjuicio de acordar por sí mismo la suspensión preventiva del funcionario de que se trate, si lo estima conveniente, en cuanto a su participación en el Jurado.

3. Cuando la falta hubiere sido cometida por el presidente, las facultades a que se refieren los párrafos anteriores corresponderán al de la Audiencia respectiva.

Artículo 38

1. El presidente y los vocales de los Jurados de expropiación tendrán derecho al percibo de las asistencias por las sesiones del Jurado en que participen, así como, en su caso, a las dietas y gastos de viaje en las comisiones que desempeñen en cumplimiento de los fines del Jurado.

2. La cuantía de las asistencias será para el presidente y todos los vocales, respectivamente, la máxima autorizada en el vigente Reglamento de Dietas.

3. En cuanto a las dietas y gastos de viaje, se devengarán por el presidente y los vocales designados en los apartados a) y b) art. 32 de la ley con arreglo a su respectiva categoría administrativa. Los Notarios vocales del Jurado gozarán, a estos efectos, de las siguientes asimilaciones: los de Madrid y Barcelona y los de primera se considerarán incluidos en el segundo grupo del anexo del vigente Reglamento de Dietas; los de segunda y tercera, en el tercer grupo.

4. Los vocales a que se refiere el apartado c) art. 32 de la ley quedarán asimilados, a los mismos efectos, a los funcionarios del segundo o tercer grupo del vigente Reglamento de Dietas, según que la ciudad sede del Jurado tenga una población igual o superior a trescientos mil habitantes o sea inferior a la misma.

5. El pago de los emolumentos o indemnizaciones a que se refieren los párr. 1º y 2º de este artículo será anticipado por los gobiernos civiles a cuyo efecto se consignarán en los presupuestos correspondientes los créditos necesarios, sin perjuicio de que los costos de la intervención del Jurado de Expropiación en cada expediente de justiprecio sean satisfechos en definitiva por las entidades expropiantes o por los beneficiarios de la expropiación, en su caso.

6. A tales efectos, las asistencias correspondientes a cada sesión del Jurado se prorratearán, en su caso, entre los expedientes de justiprecio que se hayan resuelto en la misma; y los gastos de viaje y las dietas se imputarán como costo del expediente de justiprecio con cuyo motivo se hayan devengado.

7. El costo definitivo de la intervención del Jurado por cada expediente de justiprecio a efectos de reembolso de los gobiernos civiles, será determinado por el secretario del Jurado, con el visto bueno del presidente.

8. Los demás gastos del Jurado, tanto personales como materiales, correrán a cargo de los presupuestos generales del Estado en los créditos consignados para los gobiernos civiles^[5].

SECCIÓN CUARTA. De la valoración

Artículo 39

A los efectos del art. 34 de la ley, el plazo para la decisión ejecutoria sobre el justo precio se entenderá de ocho días hábiles y comenzará a contarse desde el siguiente al en que el expediente de justo precio haya sido registrado de entrada en el Jurado Provincial de Expropiación.

Artículo 40

La fecha límite para determinar la procedencia de abonar las mejoras efectuadas en los bienes objeto de expropiación, con arreglo a los módulos señalados en el párr. 2º art. 36 de la ley, será la de iniciación del expediente expropiatorio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 28 de este reglamento.

Artículo 41

1. Siempre que los bienes o derechos objeto de expropiación forzosa sean algunos de los determinados específicamente en los arts. 39 a 43 de la ley, las tasaciones del propietario, de la Administración expropiante y del Jurado Provincial de expropiación habrán de practicarse según los criterios estimativos señalados en los mismos, con arreglo a su respectiva naturaleza.

2. En las hojas de aprecio se clasificarán los bienes o derechos de naturaleza distinta por el mismo orden en que aparecen relacionados en los artículos citados de la ley.

Artículo 42

1. Cuando se trate de expropiación de fincas rústicas, el valor en venta de las mismas será el que tengan otras fincas análogas de su clase y situación en el mismo término municipal o en la comarca.

2. Se entenderá por comarca la zona de características geográficas y económicas similares en que se encuentren situados los bienes.

Artículo 43

En la aplicación del art. 40 de la ley se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) Las cotizaciones de títulos serán las que se hayan registrado en la Bolsa en que se encuentre domiciliada estatutaria o legalmente la respectiva empresa mercantil, salvo cuando los títulos estén admitidos a cotización en más de una Bolsa y exista una diferencia igual o superior al diez por cien en los valores medios resultantes durante el año anterior en una u otra, en que se justificarán por la cotización media del último año en todas las Bolsas en que se hayan cotizado.

b) El beneficio promedio de las empresas utilizado como criterio valorativo en el apartado 2 será el resultante según el balance en los tres ejercicios sociales anteriores, debidamente capitalizado al interés legal.

Artículo 44

La indemnización prevista a favor de arrendatarios de fincas por el art. 44 de la ley procederá exclusivamente cuando la expropiación lleve consigo la privación definitiva del uso y disfrute de la finca por el titular arrendatario, pero no cuando la privación de derechos inherentes a la expropiación sea compatible con la continuidad del contrato arrendatario entre sus primitivas partes, en cuyo caso la indemnización a los arrendatarios será la determinada para las ocupaciones temporales, sin perjuicio de la posible aplicación en cualquier hipótesis de lo determinado en los párr. 1º y 3º art. 43 de la ley.

Artículo 45

[5] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

Las indemnizaciones previstas en el art. 45 de la ley corresponderán a los que por cualquier título hubieren de percibir los frutos o cosechas pendientes o realizado los trabajos de barbechera u otras labores análogos en la proporción que les corresponda en su caso.

Artículo 46

El justiprecio a que se refiere el art. 46 de la ley en ningún caso podrá ser igual o superior al que la Administración habría debido satisfacer de haber expropiado la totalidad de la finca de que se trate.

Artículo 47

El cinco por ciento del premio de afección se incluirá siempre como última partida de las hojas de aprecio de los propietarios y de la Administración o de la valoración practicada por el Jurado, y se calculará exclusivamente sobre el importe final del justiprecio de los bienes o derechos expropiables, sin que proceda, por tanto, su abono sobre las indemnizaciones complementarias señaladas en otros artículos de la ley a favor de titulares de derechos posiblemente distintos del propietario, con la sola excepción de las indemnizaciones debidas a los arrendatarios en caso de privación definitiva para los mismos del uso y disfrute de los bienes o derechos arrendados, en cuya hipótesis sus indemnizaciones se incrementarán también en el precio de afección.

Los propietarios carecerán, en cambio, de derecho al premio de afección cuando por la naturaleza de la expropiación conservan el uso y disfrute de los bienes o derechos expropiados.

CAPÍTULO IV. DEL PAGO Y TOMA DE POSESIÓN

SECCIÓN PRIMERA. Del pago

Artículo 48

1. Determinado el justo precio por cualquiera de los procedimientos previstos en el capítulo III del título II de la ley, se remitirá el expediente al Ministerio que corresponda o a la Diputación Provincial o Ayuntamiento que hayan acordado la expropiación. En el primero de los casos, el Ministro adoptará las medidas oportunas a fin de que por la Ordenación de Pagos se expida el libramiento para el pago del precio de cada expropiación. Tratándose de expropiaciones simultáneamente realizadas para una misma obra o plan y correspondientes a objetos situados en un mismo término municipal, el libramiento podrá comprender a todos ellos.

2. Cuando la expropiación beneficia a organismos autónomos oficiales, el libramiento para el pago del precio que deban realizar se ajustará a lo previsto en su legislación específica. Tanto en este caso como cuando la expropiación se haya realizado en beneficio de particulares o empresas privadas, la Administración expropiante, una vez firme el precio de la expropiación, se dirigirá a los beneficiarios, notificándoles el lugar y fecha en que habrán de realizar el pago estándose a lo que dispone el párrafo siguiente en cuanto a la notificación a los perceptores del mismo.

Artículo 49

1. Recibido en la provincia el libramiento para el pago de la expropiación y hecho efectivo por el pagador, se señalará por el gobernador o delegado de la Administración que tenga expresamente atribuidas las facultades expropiatorias el día en que se haya de proceder al pago, el cual se anunciará en el Boletín Oficial de la provincia con la debida antelación, dándose también el oportuno aviso al alcalde del término correspondiente, al que se remitirá la lista de los interesados. El alcalde se dirigirá a cada uno de éstos, dándoles conocimiento del día, hora y local en que se haya de verificar el pago.

2. En el día, hora y lugar señalados se reunirá el alcalde, el representante del expropiante o delegado autorizado por el mismo al efecto, el pagador, el secretario del Ayuntamiento y los interesados que hubieran acudido al llamamiento y se procederá al pago de las cantidades asignadas, siguiendo el orden de la lista remitida por el gobernador civil o delegado de la Administración competente^[6].

3. Con independencia de lo que se dice en los párrafos anteriores, los expropiados podrán dirigirse al gobernador civil o autoridad competente^[7], exponiendo que desean percibir el precio de la expropiación en la capital de la provincia. Las circunstancias podrán aconsejar que en determinados casos, se pueda acceder a que el pago se realice en otro lugar que designe el interesado.

4. El pago se hará en dinero y precisamente a quienes figuren como dueños de la cosa o titulares del derecho expropiado, de acuerdo con lo previsto en el art. 3 de la ley, no admitiéndose representación, sino por medio de poder debidamente autorizado, ya sea general, ya especial, para este caso. Los interesados deberán identificar su persona con la documentación oportuna, y en su defecto, por el conocimiento directo que testifiquen el alcalde o el secretario del Ayuntamiento.

Artículo 50

1. No se admitirá a ninguno de los interesados protesta ni observación alguna al firmar el «Recibí» de la cantidad que les corresponde, cuyo recibo habrá de constar en la hoja respectiva. En caso de que alguno de ellos tuviese algo que objetar, se suspenderá el pago de la expropiación de su parte, advirtiéndosele del derecho a elevar la reclamación que proceda.

2. Las incidencias del pago se reflejarán en el acta que oportunamente habrá de levantarse.

Artículo 51

[6] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

[7] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

1. Se consignará la cantidad a que asciende el justo precio en los casos siguientes:

- a) Cuando no concurra al acto del pago el propietario o el titular interesado, por sí o por otra persona que acredite fehacientemente su representación, o cuando rehusasen recibir el precio.
- b) Si fueren varios los interesados y no se pusieren de acuerdo sobre la cantidad que a cada uno corresponde, o existiere cualquiera cuestión o litigio entre ellos, o entre ellos y la Administración.
- c) Cuando comparezca el Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 de la ley.
- d) Cuando comparezcan personas que no puedan enajenar sin permiso o resolución de la autoridad judicial, a que se refiere el art. 6 de la ley.
- e) Cuando, tratándose de bienes inmuebles, los titulares de cargas o derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad no comparecieren al acto del pago.
- f) En los demás casos previstos por las leyes.

2. Será objeto de consignación la cantidad a que ascienda el justo precio o la parte del mismo objeto de discordia, según los casos, más la cantidad que proceda por el interés legal liquidado, conforme a los arts. 56 y 57 de la Ley.

3. La consignación se efectuará en la Caja General de Depósitos en metálico y en concepto de depósito necesario sin interés, a disposición del expropiado.

4. Cuando exista litigio pendiente con la Administración el interesado tendrá derecho a que se le entregue la indemnización hasta el límite en que exista conformidad, quedando en todo caso subordinada dicha entrega provisional al resultado del litigio.

apa.2 Dada nueva redacción por art.un D 1780/1967 de 13 julio 1967

apa.3 Dada nueva redacción por art.un D 1780/1967 de 13 julio 1967

SECCIÓN SEGUNDA. De la toma de posesión

Artículo 52

1. La expropiación forzosa produce la extinción de los arrendamientos y de cualesquiera otros derechos relativos a la posesión y ocupación de los bienes expropiados.

2. La ocupación administrativa de la cosa expropiada sólo podrá realizarse cuando los titulares de los derechos hayan percibido la indemnización que pudiera corresponderles en aplicación del cap. III tít. II de la ley, o consignada en la Caja General de Depósitos en los supuestos previstos en el art. 51.

Artículo 53

Cumplido, cuando proceda, el requisito anterior, el gobernador civil o la autoridad a quien corresponda^[8], notificará a los ocupantes de la finca expropiada el plazo en que deben desalojarla, de acuerdo con las circunstancias y respetando en cualquier caso los plazos mínimos señalados en la Ley de Arrendamientos Urbanos y demás disposiciones legales.

Artículo 54

Los desahucios y lanzamientos que exija la ocupación de las fincas expropiadas tendrán carácter administrativo.

Artículo 55

1. Se extenderá acta de ocupación de la cosa o derecho expropiados a continuación de la de pago o consignación.

2. Si se tratase de bienes o derechos reales inscribibles en el Registro de la Propiedad, el acta de ocupación deberá contener las prevenciones siguientes:

a) Nombres, apellidos y estado civil del beneficiario, si es persona natural, y si es persona jurídica, la denominación con que fuese conocida, domicilio y nombre y circunstancias de las personas que en su representación intervinieren en el acta de ocupación.

b) Las mismas circunstancias de la persona o personas que, según el acta de pago, reciben el justo precio, y si tuvo lugar la consignación, la razón por la que se llevó a cabo ésta, según el art. 51 de este reglamento.

c) La naturaleza, situación y linderos de los bienes inmuebles objeto de expropiación o a los cuales afecte el derecho que debe inscribirse o cuya inscripción cancele, y su medida superficial.

d) La naturaleza y extensión del derecho a que la expropiación se refiera.

e) La obra o servicio que motivó la expropiación.

Artículo 56

1. El acuerdo en que se declare la urgente ocupación de bienes afectados por una expropiación, deberá estar debidamente motivado, con la exposición de las circunstancias que, en su caso, justifican el excepcional procedimiento previsto en el art. 52 de la ley y

[8] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

conteniendo referencia expresa a los bienes a que la ocupación afecta o el proyecto de obras en que se determina, así como al resultado de la información pública en la que por imposición legal, o en su defecto, por plazo de quince días, se haya oído a los afectados por la expropiación de que se trate.

2. En estos casos no será procedente recurso alguno, pero los interesados, una vez publicada la relación y hasta el momento del levantamiento del acta previa, podrán formular por escrito ante el organismo expropiante, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Artículo 57

1. Si al levantamiento del acta previa a la ocupación a que se refiere el núm. 3 art. 52 de la ley, al que deberá asistir, en todo caso, el beneficiario de la expropiación o quien lo represente, no acudiese el alcalde o su delegado, se suspenderá la diligencia, acordándose seguidamente por quien corresponda nueva citación, también con antelación a ocho días naturales y dándose cuenta al gobernador civil de la provincia para que ordene a la autoridad municipal la asistencia al nuevo acto con prevención de las responsabilidades en que, caso de desobediencia, pueda incurrir^[9].

2. En el supuesto de que el beneficiario no tenga reparos que oponer, la pasará a su perito para que en el plazo que se fije formule la tasación que sirva de base a las hojas de depósito previo a la ocupación, de acuerdo con lo que se dispone en la regla 4ª art. 52 de la ley. En los casos no previstos en dicha regla, la tasación se ajustará a los criterios contenidos en el capítulo III del título II de la ley.

Artículo 58

1. La cantidad determinada deberá consignarse inmediatamente en la Caja de Depósitos, a no ser que el expropiado, cuando no hubiese cuestión sobre su titularidad, prefiera percibirla renunciando a los intereses legales de la misma que se establecen en la regla 4ª art. 52 de la ley. Si por cualquier causa la cantidad percibida resultase mayor que la que se fija definitivamente como justo precio, el expropiado habrá de reintegrar el exceso, que podrá exigírsele por vía de apremio a través del gobernador civil o autoridad competente^[10].

2. En el plazo señalado al perito para formular las hojas de aprecio deberá consignarse en hoja aparte la cuantía de la indemnización a que se refiere el núm. 5º art. 52 de la ley. Una copia de ambas se comunicará a cada interesado, quien -sin carácter de recurso- podrá objetar sobre la existencia de errores materiales en la determinación del depósito o inadecuada apreciación de las indemnizaciones procedentes. Si la Administración no rectifica, la cuestión quedará diferida al momento en que el Jurado Provincial conozca del expediente.

Artículo 59

Caso de que alguien opusiere resistencia a la ocupación acordada, el beneficiario se dirigirá al gobernador civil de la provincia^[11], quien, después de cerciorarse de que han sido cumplidos los trámites de la ley, le prestará el auxilio de la fuerza pública para efectuar el lanzamiento y ocupación sin perjuicio de las responsabilidades penales exigibles.

SECCIÓN TERCERA. De la inscripción en los registros

Artículo 60

1. Cuando los bienes objeto de la expropiación sean inscribibles en algún Registro público, el expropiante o el beneficiario solicitarán la inscripción en el mismo de la transmisión, constitución o extinción de los derechos que hayan tenido lugar para la expropiación forzosa.

2. A tal efecto, será título bastante el acta de pago o resguardo de depósito a que se refiere el art. 50 de la ley, en su caso, y el acta de ocupación.

3. En los supuestos excepcionales de urgencia, a que se refiere el art. 52 Ley de Expropiación Forzosa, se suspenderá la inscripción hasta que, fijado definitivamente el justo precio, se haya verificado el pago o su consignación, sin perjuicio de que pueda practicarse en el Registro de la Propiedad anotación preventiva mediante la presentación del acta previa de ocupación y el resguardo de depósito provisional, cuya anotación se convertirá en inscripción cuando se acredite el pago a la consignación del justo precio.

Artículo 61

1. Cuando se trate de la expropiación de patentes y modelos de utilidad a que se refiere el párr. 1º art. 99 de la ley se hará constar expresamente en el Registro de la Propiedad Industrial si la misma se ha llevado a cabo para uso exclusivo del Estado o para lograr la difusión del invento. En este último supuesto se cancelará la inscripción, cesando los efectos de la misma.

2. En estos casos bastará presentar en el Registro el Boletín Oficial del Estado en que se publique la ley prevista en el artículo citado en el párrafo anterior y el acta de pago o consignación de la cantidad en aquélla fijada.

3. La expropiación de las restantes modalidades de la propiedad industrial se inscribirá con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 62

[9] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

[10] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

[11] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

1. Si la expropiación tuviese por objeto bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, la inscripción a que se refiere el art. 60 tendrá lugar en el Registro de la Propiedad.

2. Cuando la finca expropiada no estuviere inscrita se practicará la correspondiente inmatriculación, excepto si ha adquirido la condición de dominio público como consecuencia de la expropiación.

3. En los demás casos se inscribirá la transmisión, constitución o extinción de los derechos objeto de la expropiación.

4. Si la expropiación tuviere por objeto el dominio del inmueble se inscribirá la correspondiente transmisión y se verificará en su caso la cancelación de cargas, gravámenes y derechos reales a que estuviere afecta la cosa expropiada, excepto de aquellos que por ser compatibles con el mismo destino que haya de darse al inmueble sean conservados, a tenor de lo dispuesto en el art. 3 de la ley.

5. Si la expropiación tuviere por objeto un derecho real limitativo del dominio:

a) En el caso de que el titular registral del dominio fuera el beneficiario de la expropiación, se procederá a la cancelación del derecho expropiado.

b) En los demás casos se inscribirá el derecho expropiado a nombre del beneficiario.

SECCIÓN CUARTA. Reversión de bienes y derechos expropiados

Artículo 63

Procederá la reversión de los bienes o derechos expropiados en los siguientes casos:

a) Cuando no se ejecute la obra o no se establezca el servicio que motivó la expropiación.

b) Cuando realizada la obra o establecido el servicio quede alguna parte sobrante de los bienes expropiados.

c) Cuando desaparezca la afectación de los bienes o derechos a las obras o servicios que motivaron la expropiación.

Artículo 64

1. Se entenderá no ejecutada la obra o establecido el servicio cuando no habiéndolo sido de hecho manifestare la Administración su propósito de no llevarla a cabo o de no implantarlo, bien sea por notificación directa a los expropiados, bien por declaraciones o actos administrativos que impliquen la inejecución de la obra que motivó la expropiación o el no llevar a cabo el establecimiento del servicio.

2. En todo caso, transcurridos cinco años desde la fecha en que los bienes o derechos expropiados quedaron a disposición de la Administración sin que se hubiera iniciado la ejecución de la obra o establecido el servicio, o dos años desde la fecha prevista a este efecto, los titulares de aquellos bienes o derechos o sus causahabientes, podrán advertir a la Administración expropiante de su propósito de ejercitar la reversión, pudiendo efectivamente ejercitarla si transcurren otros dos años desde la fecha de aviso sin que se hubiere iniciado la ejecución de la obra o establecido el servicio^[12].

Declarada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Acordada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Artículo 65

En los casos b) y c) art. 63, la notificación por parte de la Administración de la existencia de terrenos o bienes sobrantes o de la desafectación, facultará a los titulares de los bienes o derechos expropiados o a sus causahabientes para solicitar la reversión. Asimismo, procederá ésta, en defecto de aquella notificación, cuando quedaren de hecho bienes o terrenos sobrantes y hubieran transcurrido cinco años desde la terminación de la obra o establecimiento del servicio^[13].

Declarada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Acordada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Artículo 66

1. Se prohíbe la realización de obras o el establecimiento de servicios distintos en relación con los terrenos o bienes expropiados a aquellos que motivaron la expropiación.

2. En los casos en que como consecuencia de una alteración indebida no fuere legalmente posible la reversión, se estará a lo previsto en el art. 121 de la ley, apartado 1, sin perjuicio de que se deduzcan las responsabilidades previstas en el mismo precepto^[14].

Declarada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Acordada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Artículo 67

[12] Artículo declarado vigente, conforme a la disp. derog. 2ª Ley 38/1999 de 5 noviembre, en cuanto no se oponga o resulte compatible con la nueva redacción de los arts. 54 y 55 Ley de Expropiación Forzosa, dada por su disp. adic. 5ª.

[13] Artículo declarado vigente, conforme a la disp. derog. 2ª Ley 38/1999 de 5 noviembre, en cuanto no se oponga o resulte compatible con la nueva redacción de los arts. 54 y 55 Ley de Expropiación Forzosa, dada por su disp. adic. 5ª.

[14] Artículo declarado vigente, conforme a la disp. derog. 2ª Ley 38/1999 de 5 noviembre, en cuanto no se oponga o resulte compatible con la nueva redacción de los arts. 54 y 55 Ley de Expropiación Forzosa, dada por su disp. adic. 5ª.

1. Los expropiados o sus causahabientes podrán solicitar del gobernador civil la declaración de procedencia de la reversión^[15], siempre que estimen que concurre cualquiera de las situaciones previstas en los artículos anteriores.

2. El plazo de un mes a que se refiere el art. 55 de la ley empezará a contarse:

a) Desde el día siguiente al de la notificación del acto que diere lugar a la reversión, según el art. 63.

b) Desde que el expropiado compareciera en el expediente y se diera por notificado de las declaraciones, disposiciones o actos administrativos que implicaren la inejecución de la obra o no establecimiento del servicio, que motivaron la expropiación.

c) Una vez transcurran los plazos previstos en el art. 64 párr. 2º.

3. El gobernador civil resolverá^[16], previo informe de la Administración interesada, y previas las comprobaciones que estime oportunas, contra cuya resolución cabrá recurso de alzada ante el Ministro competente por razón de la materia, contra cuyo acuerdo será admisible el recurso contencioso-administrativo.

4. Si la Administración no notificare la decisión de la petición o del recurso de alzada a que se refieren los párrafos anteriores, en el plazo de tres meses, podrán entenderse denegados, en la forma y con los requisitos previstos en el art. 38 LJCA^[17].

Declarada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Acordada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Artículo 68

Declarada la reversión a favor de determinada persona se procederá de oficio a la valoración de los bienes o derechos objeto de la misma, con arreglo a las normas contenidas en el capítulo III, título II de la ley y a las disposiciones concordantes de este reglamento. En el caso previsto en el párr. 2º art. 54 de la ley, tan solo intervendrá el Jurado de Expropiación si no hubiera acuerdo entre el beneficiario de la expropiación y los que hubieren promovido la reversión acerca de las mejoras realizadas o de los daños producidos^[18].

Declarada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Acordada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Artículo 69

1. Cuando se dé alguna de las causas legitimadoras de la reversión, procederá ésta, aun cuando los bienes o derechos hayan pasado a poder de terceros adquirentes por la presunción del art. 34 Ley Hipotecaria, sin perjuicio del derecho de repetición de los mismos contra quien proceda por los daños y perjuicios ocasionados.

2. En todo caso, los terceros adquirentes tendrán derecho a ser oídos en el expediente de reversión, para aportar los datos y alegaciones que consideren oportunos en contra de la misma^[19].

Declarada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Acordada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Artículo 70

1. Tan sólo será preciso el otorgamiento de escritura pública para formalizar la reversión si lo solicitasen los interesados. En caso contrario, será suficiente y servirá como título inscribible si ha de surtir efectos en los Registros públicos la resolución administrativa que la declare según lo dispuesto en los artículos anteriores y el acta de pago que se levantará por el gobernador civil respectivo a hacerle el mismo^[20].

2. Cuando surgieran discrepancias sobre mejoras, daños o incremento de valor y haya de intervenir el Jurado de Expropiación se consignará el valor percibido por los interesados, salvo que el expropiante prefiera recibirlo sin perjuicio de lo que se resuelva, levantándose acta en la forma dispuesta en el párrafo anterior, siendo título inscribible dicha acta en unión de la resolución prevista en el citado párrafo^[21].

Declarada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

Acordada la vigencia en cuanto no se opongan o sean incompatibles con la disp. adic. 5ª por Ley 38/1999 de 5 noviembre 1999

CAPÍTULO V. RESPONSABILIDAD POR DEMORA

Artículo 71

[15] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

[16] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

[17] Artículo declarado vigente, conforme a la disp. derog. 2ª Ley 38/1999 de 5 noviembre, en cuanto no se oponga o resulte compatible con la nueva redacción de los arts. 54 y 55 Ley de Expropiación Forzosa, dada por su disp. adic. 5ª.

[18] Artículo declarado vigente, conforme a la disp. derog. 2ª Ley 38/1999 de 5 noviembre, en cuanto no se oponga o resulte compatible con la nueva redacción de los arts. 54 y 55 Ley de Expropiación Forzosa, dada por su disp. adic. 5ª.

[19] Artículo declarado vigente, conforme a la disp. derog. 2ª Ley 38/1999 de 5 noviembre, en cuanto no se oponga o resulte compatible con la nueva redacción de los arts. 54 y 55 Ley de Expropiación Forzosa, dada por su disp. adic. 5ª.

[20] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

[21] Artículo declarado vigente, conforme a la disp. derog. 2ª Ley 38/1999 de 5 noviembre, en cuanto no se oponga o resulte compatible con la nueva redacción de los arts. 54 y 55 Ley de Expropiación Forzosa, dada por su disp. adic. 5ª.

1. A los efectos del art. 56 de la ley, la situación de mora se entenderá iniciada después de transcurrir seis meses contados desde la fecha en que sea firme el acuerdo de necesidad de ocupación.

2. No existirá mora si el beneficiario o el expropiado han recurrido contra el acuerdo del Jurado Provincial fijando el justo precio y éste hubiere sido dictado antes del transcurso de seis meses a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 72

1. La responsabilidad por demora se imputará al causante de la misma. Si lo fuere el beneficiario de la expropiación, decidirá el Jurado sobre su procedencia y cuantía al fijar el justiprecio.

2. Cuando el retraso sea imputable a la Administración expropiante o al propio Jurado de expropiación, la responsabilidad exigible quedará comprendida en el párr. 1º art. 121 de la ley y se hará efectiva con arreglo al procedimiento previsto en este reglamento para tal supuesto.

3. En ningún caso habrá lugar al pago de intereses de demora si ésta fuere imputable al expropiado.

Artículo 73

1. A los efectos del art. 57 de la ley, se entenderá definitivamente fijado el justo precio cuando lo haya sido en vía administrativa.

2. Si la fijación del justo precio hubiera sido impugnada, los intereses se devengarán sobre la cantidad determinada en la sentencia firme, liquidándose con efectos retroactivos desde la fecha legal de iniciación de la mora, con arreglo a lo dispuesto en el art. 71, hasta la determinación definitiva del justiprecio en vía administrativa.

Artículo 74

1. En relación con lo dispuesto en el art. 58 de la ley se entenderá por justo precio el fijado administrativamente.

2. La nueva evaluación prevista en dicho artículo de la ley se hará a instancia del expropiado, por quien se formulará nueva hoja de aprecio en la forma prevista en su art. 29, sin necesidad de requerimiento de la Administración. Presentada esta instancia se seguirán los trámites previstos en el cap. III tít. II.

TÍTULO III. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

CAPÍTULO PRIMERO. DE LA EXPROPIACIÓN POR ZONAS O GRUPOS DE BIENES

Artículo 75

Cuando la ejecución de una obra exija la expropiación de grandes zonas territoriales o series de bienes susceptibles de una consideración de conjunto, el Ministerio del que dependa la obra redactará y aprobará el correspondiente proyecto, que someterá al Consejo de Ministros, para que, mediante decreto, pueda acordar la aplicación del procedimiento expropiatorio especial regulado en el cap. I tít. III de la ley.

Artículo 76

El acuerdo del Consejo de Ministros, a que se refiere el artículo anterior, llevará implícita la declaración de la necesidad de la ocupación de los bienes afectados por dicho proyecto y sus reformas posteriores.

Artículo 77

1. En la formulación del proyecto de clasificación de los terrenos o grupos de bienes a que se refiere el art. 61 de la ley, se tendrá en cuenta, además de su naturaleza económica, la situación, calidad o clase de los terrenos o de los bienes, su producción, cultivos, rendimiento, valor en venta, riqueza imponible, cuota de contribución que les corresponda y demás características que les sean homogéneas

2. La clasificación de los bienes comprenderá forzosamente un cuadro razonado de los precios máximos y mínimos de valoración por cada polígono o grupo de bienes, con sus correspondientes módulos de aplicación, cuyos precios se fijarán por peritos designados por el beneficiario, tomando por base lo dispuesto en el artículo anterior y lo que disponen los arts. 37 y ss. de la ley y concordantes de este reglamento.

Artículo 78

1. Los edictos que han de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, según el art. 62 de la ley, se referirán a la apertura del trámite de información pública, y en los mismos se expresará el lugar, días y horas en que podrá ser examinado el proyecto por los interesados.

2. En el Boletín Oficial del Estado se publicará un extracto de los edictos a que se refiere el artículo anterior.

3. La notificación del proyecto a los Ayuntamientos y entidades corporativas y sindicales, a que se refiere el art. 62 de la ley, se les hará remitiendo una copia del mismo a los organismos referidos, para que éstos le den la publicidad necesaria para que llegue a conocimiento de los vecinos o miembros de la entidad o corporación y puedan examinar la copia del proyecto.

4. Los periódicos diarios en que se inserten edictos para la información pública del proyecto de precios máximos y mínimos percibirán sus tarifas en la forma prevista en el art. 24.

Artículo 79

Las reclamaciones que se presenten contra el proyecto de clasificación de los bienes a expropiar en polígonos o grupos durante el plazo de información pública serán resueltas por la Administración dentro del mes siguiente, sin que contra este acuerdo proceda recurso alguno, salvo lo dispuesto en el art. 81.

Artículo 80

Si no se presentase reclamación contra el proyecto de precios máximos y mínimos durante la información pública, la Administración lo elevará a definitivo mediante acuerdo, que no será susceptible de recurso alguno.

Artículo 81

1. Si se hubiesen presentado reclamaciones contra los precios máximos y mínimos, la Administración formulará una hoja de aprecio definitiva y motivada, en la que necesariamente habrá de constar la clasificación del bien y precios máximos aplicables al mismo, que será notificada al reclamante, el cual contestará lisa y llanamente, en el plazo de diez días, si la acepta o la rechaza. El silencio del interesado se estimará como aceptación de la oferta de la Administración.

2. Si el reclamante rechazase la hoja de aprecio de la Administración, se enviará el expediente dentro del plazo de diez días, a partir del que se produzca la discordia, al Jurado Provincial de Expropiación, que fijará definitivamente en vía administrativa la clasificación y los precios controvertidos. Contra este acuerdo se dará el recurso contencioso en los términos comunes del art.126 de la ley.

Artículo 82

Las clasificaciones de precios máximos y mínimos del proyecto correspondiente, referentes a polígonos o grupos, que no hubiesen sido objeto de controversia se reputarán firmes y definitivos a todos los efectos.

Artículo 83

1. Una vez firmes y definitivos los precios, con sus correspondientes módulos de aplicación, en su caso, serán preceptivos para la valoración de las fincas o bienes comprendidos en cada grupo o polígono respectivo.

2. Sin embargo, si se produjeran discrepancias entre la Administración y los interesados, en cuanto a la aplicación de aquellos precios, se tramitarán y resolverán por el procedimiento establecido en los arts. 26 y siguientes de la ley y los concordantes de este reglamento.

Artículo 84

Transcurridos cinco años desde que se fijaron los cuadros de precios máximos y mínimos, los interesados en la expropiación podrán solicitar de la Administración expropiante la revisión y actualización de dichos precios, que se llevará a efecto por el mismo procedimiento y con las garantías señaladas en los artículos anteriores.

Artículo 85

La Administración resolverá dichas peticiones en el plazo de un mes, y contra el acuerdo expreso o tácito desestimándolas, podrán utilizar los interesados o sus causahabientes la vía contenciosa, en los términos previstos en el art. 126 de la ley.

Artículo 86

Serán aplicables a los expedientes tramitados por este procedimiento especial las disposiciones generales de la ley y de este reglamento sobre garantías jurisdiccionales, responsabilidad por demora, reversión, beneficiarios de la expropiación y pago y toma de posesión de los bienes expropiados.

CAPÍTULO II. DE LA EXPROPIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD

Artículo 87

El incumplimiento de la función social de la propiedad, conforme a lo dispuesto por el art. 71 de la ley, es una de las causas de interés social que legitiman la expropiación forzosa.

Artículo 88

1. Son requisitos necesarios para la aplicación de esta causa de expropiación los determinados por el art. 72 de la ley.

2. La declaración a que se refiere el párr. 1º de dicho artículo debe ser hecha mediante ley, bien específicamente, bien por clases o categorías de bienes, supuesto este último en el cual será preciso un decreto acordado en Consejo de Ministros para formular la declaración particular que proceda en cada caso concreto.

Artículo 89

La subasta a que se refiere el art. 75 de la ley, apartados b) y c), será anunciada mediante edictos, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado y en un periódico, al menos, de gran circulación en la provincia donde los bienes están situados, con la tarifa a que se refiere el art. 24. Los gastos de estas inserciones se descontarán del precio de licitación, antes de ser entregado al expropiado.

Artículo 90

Cuando un bien se encuentre en el estado público de venta a que se refiere el art. 75, apartado d), de la ley, constará en el Registro especial si existiere y se publicará en edictos, que se repetirán mensualmente desde la caducidad final del expediente, conforme a lo dispuesto en el apartado e) del mismo artículo. Estos edictos se ajustarán a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 91

Cuando las leyes especiales de calificación de una determinada función social de la propiedad con intimación de expropiación forzosa, establezcan normas especiales de procedimiento para la misma, las normas de la Ley General de Expropiación Forzosa y las de este reglamento serán de aplicación subsidiaria.

CAPÍTULO III. DE LA EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES DE VALOR ARTÍSTICO, HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

SECCIÓN PRIMERA. De la expropiación en general

Artículo 92

1. La expropiación de bienes, muebles e inmuebles de valor artístico, histórico y arqueológico, se regirá por el procedimiento especial de este capítulo y el correspondiente de la ley.

2. En cuanto a los bienes inmuebles, la expropiación únicamente se ajustará al procedimiento especial dispuesto por la ley cuando dichos bienes hubieran obtenido la correspondiente declaración oficial de su carácter artístico, histórico y arqueológico, con antelación mínima de un año a la fecha de iniciarse el expediente expropiatorio.

Artículo 93

El gobernador civil^[22], una vez acordada la expropiación, podrá adoptar cuantas medidas estime necesarias para que no se alteren las características de la cosa o bien afectado por aquélla, manteniéndose la continuidad del destino funcional del inmueble sujeto a expropiación, o del en que radiquen los objetos expropiables.

Artículo 94

1. La designación de los académicos que han de constituir la Comisión pericial, a que se refiere el art. 78 de la ley, habrá de recaer, si fuera posible, en quienes estén especializados en el estudio de bienes u objetos de la misma clase que los afectados por la expropiación.

2. Cuando los bienes u objetos que hayan de ocuparse o expropiarse pertenezcan a la Iglesia Católica serán designados, con preferencia, los académicos que formen parte de la comisión diocesana correspondiente, si estuviere constituida, que se establece en el art. XXI del vigente Concordato.

Artículo 95

1. En la misma fecha de la orden ministerial por la que se acuerde la expropiación, el Ministerio de Educación Nacional designará al académico que ha de representarle, cuyo nombramiento se notificará al interesado y al Instituto de España.

2. El propietario del bien u objeto afectado por la expropiación, en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de recepción de la notificación a que se refiere el párrafo anterior, deberá poner en conocimiento del Instituto de España el nombre y residencia del académico que ha designado, acompañando escrito de este último por el que manifieste la aceptación del cargo.

3. El académico que designe la Mesa del Instituto de España, que será presidente de la comisión, tendrá voto de calidad en las decisiones y las facultades de convocatoria y dirección de las actuaciones que haya de practicar la Comisión, la cual habrá de constituirse formalmente en el plazo de un mes.

Artículo 96

1. La Comisión formulará su dictamen dentro del mes siguiente a la fecha de su constitución.

2. El justo precio se determinará por acuerdo motivado de la Comisión en el que se expresarán cuantos elementos, cualquiera que sea su naturaleza, hubieran justificado la peritación. En ningún caso el justo precio podrá ser inferior del que resultare si se aplicaren las disposiciones del título II de la ley.

3. En los casos en que no exista acuerdo unánime la propuesta particular del académico disidente será unida a la pieza del justo precio.

4. El acuerdo de la Comisión podrá ser impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 126 de la ley.

SECCIÓN SEGUNDA. De los derechos de tanteo y retracto

Artículo 97

[22] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

1. Sin perjuicio de la posibilidad de actuación de la potestad expropiatoria, con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores, el Estado podrá ejercer, para sí o para otra persona pública, el derecho de tanteo y retracto a que se refiere el art. 81 de la ley, en los casos de exportación, venta pública, subasta o liquidación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico.

2. El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se ajustará a las condiciones y plazos que se señalen en el art. 81 de la ley.

3. En garantía de la efectividad del pago del precio correspondiente al titular de la cosa o bien objeto de uno u otro derecho, el Ministerio de Educación Nacional y la Intervención de la Administración del Estado estarán obligados a expedir el libramiento oportuno con cargo a los créditos consignados en los presupuestos para la adquisición de bienes en los que concurren las citadas características. Si el beneficiario fuera otra persona pública, el Ministerio de Educación Nacional adoptará las medidas convenientes para que el pago del precio se efectúe en las condiciones y plazos legales.

4. La misma obligación corresponderá a los citados órganos del Estado en los casos en que por el particular interesado se acepten otras formas de pago del precio o plazos para su efectividad.

Artículo 98

La demora superior a seis meses en el pago del precio total o de la anualidad correspondiente dará lugar a un recargo equivalente al interés legal.

Artículo 99

En tanto se hace efectivo el precio de la cosa o bien sobre el que se hubiera ejercitado el derecho de tanteo o de retracto, se respetará al propietario de aquél en la posesión del mismos.

Artículo 100

1. Si transcurriesen los plazos previstos en el art. 81 de la ley sin que por el Estado se ejercitasen los derechos de tanteo o retracto, el bien o la cosa afectados quedarán de libre disposición de su titular, sin perjuicio de las facultades reconocidas al Ministerio de Educación Nacional por la Ley del Tesoro Artístico y disposiciones complementarias, así como de la posibilidad de aplicar las normas contenidas en la sección primera de este capítulo.

2. La reclamación de daños y perjuicios originados por el ejercicio de los derechos de tanteo o de retracto o por la demora en el pago del precio del bien sujeto a los mismos se ajustará, cuando proceda, a lo dispuesto en el capítulo general de indemnización por daños.

CAPÍTULO IV. DE LA EXPROPIACIÓN POR ENTIDADES LOCALES O POR RAZÓN DE URBANISMO

Artículo 101

1. Lo dispuesto en el art. 85 de la ley será de aplicación a las expropiaciones llevadas a cabo por las entidades locales referentes a obras o servicios incluidos en planes o proyectos municipales o provinciales.

2. Cuando sean beneficiarios se aplicarán las disposiciones generales de la Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 102

Las expropiaciones que se realicen por razón de urbanismo se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Régimen del Suelo y disposiciones vigentes o que puedan dictarse en lo sucesivo sobre dicha materia.

Artículo 103

Cuando funcionen Comisiones y Organismos encargados no sólo de la aprobación de planes de urbanismo, sino de su ejecución y realización, el funcionario técnico a que se refiere el apartado b) art. 32 Ley de Expropiación Forzosa será designado por los mismos.

CAPÍTULO V. DE LA EXPROPIACIÓN QUE DÉ LUGAR A TRASLADO DE POBLACIONES

Artículo 104

Siempre que fuere preciso expropiar las tierras o instalaciones industriales que sirvan de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el expropiante lo pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros, y, a la vez, remitirá al Instituto Nacional de Colonización una relación nominal de todos los vecinos que deban ser trasladados^[23], con expresión de los que sean cultivadores personales de tierras en propiedad o en arrendamiento, número de familiares y bienes afectados por la expropiación.

Artículo 105

El expediente de expropiación se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en la ley, y se extenderá no sólo a las tierras de necesaria ocupación, sino a la totalidad de los bienes inmuebles sitios en el territorio de la entidad afectada, excepto aquellos en que sus dueños soliciten la exclusión al ser requeridos para la presentación de la hoja de aprecio.

[23] Téngase en cuenta el art. 5.1 Ley 35/1971 de 21 julio.

Artículo 106

Además de la indemnización a que tienen derecho los vecinos de la Entidad por los perjuicios que les ocasione el traslado, los mismos podrán pedir su instalación en el territorio de la nueva Entidad local que se constituya, en las condiciones que determina el art. 111 de este reglamento.

Artículo 107

La determinación de los tipos aplicables en la indemnización por los perjuicios que detalla el art. 89 de la ley se hará por el Consejo de Ministros, a propuesta de una Comisión formada por un representante del gobernador civil de la provincia^[24], un Ingeniero de la Jefatura Agronómica, el Alcalde de la Entidad afectada, un representante de la organización sindical nombrado por el delegado provincial y otro del beneficiario de la expropiación.

Artículo 108

Establecidos por el Consejo de Ministros los tipos de indemnización, previo dictamen del de Estado, el gobernador civil de la provincia ordenará su publicación en la forma que determina el párr. 2º art. 18 de la ley para que en el plazo de quince días los interesados puedan solicitar por escrito ante dicha autoridad la indemnización a que crean tener derecho, expresando las circunstancias en que fundan su petición^[25].

Artículo 109

Dentro de los treinta días siguientes a la terminación del plazo para la presentación de instancias la Comisión a que se refiere el art. 107 fijará la indemnización abonable a cada interesado, los que podrán recurrir dentro de los quince días siguientes a la notificación ante el Jurado Provincial de Expropiación cuando se hayan aplicado indebidamente los tipos aprobados por el Consejo de Ministros. El pago de las indemnizaciones se efectuará en la forma prevista en el cap. IV tít. II de la ley y en las normas de este reglamento.

Artículo 110

Los vecinos que deseen ser instalados en el territorio de la nueva Entidad local lo expresarán así en la instancia solicitando la indemnización a que se refiere el art. 91 de la ley, acompañando una descripción detallada de las viviendas que ocupaban y de las fincas que personal y directamente explotaban afectadas por la expropiación.

Artículo 111

Expuesta al público la relación de vecinos que deseen ser trasladados y hechas las rectificaciones que procedan, después de transcurrir el plazo de quince días, se remitirá al Instituto Nacional de Colonización para que éste^[26], teniendo en cuenta los datos que figuran en la relación, los que le haya facilitado el expropiante y cuantos puedan proporcionarse de los informes que al efecto solicite, estudie el problema social y su posible solución mediante el traslado de las familias afectadas que voluntariamente lo hayan solicitado, a las zonas de regadío en las que el Instituto desarrolla su actividad o a las fincas que al efecto adquiera por compra voluntaria o por expropiación forzosa, conforme a las normas que regulan la actuación de este Organismo, en los casos de expropiación por razones de interés social.

Artículo 112

Las solicitudes de traslado con la propuesta del Instituto se elevarán a la aprobación del Consejo de Ministros, el que podrá autorizar a dicho Organismo para la adquisición de la finca o fincas adecuadas para el establecimiento de los vecinos que hayan solicitado el traslado y creación de la nueva Entidad local.

Artículo 113

La instalación de las familias que acepten el traslado a las fincas o terrenos del Instituto Nacional de Colonización se hará por el mismo discrecionalmente^[27], teniendo en cuenta las circunstancias que concurren en cada caso y procediendo a adjudicar a cada uno los lotes o parcelas de terrenos de independencia económica que puedan servir de base a la constitución de patrimonios familiares.

Artículo 114

Para la amortización del valor de los bienes que se adjudiquen a cada una de las familias trasladadas, el Instituto Nacional de Colonización designará en primer término una cantidad comprendida entre el 80 por 100 y el importe total de lo que cada expropiado deba percibir como precio o indemnización de todos los bienes que se le expropien, entendiéndose subrogado el Instituto en los derechos de los expropiados que voluntariamente hubieren verificado el traslado a que se refiere el art. 106, a cuyo efecto éstos, al formular la petición, habrán de conferir por escrito a dicho Organismo su representación, para que éste actúe en nombre de los mismos en el expediente expropiatorio desde que se inicien las actuaciones para determinar el justo precio hasta el momento del pago, que habrá de hacerse directamente al Instituto^[28].

[24] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

[25] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

[26] Téngase en cuenta el art. 5.1 Ley 35/1971 de 21 julio.

[27] Téngase en cuenta el art. 5.1 Ley 35/1971 de 21 julio.

[28] Téngase en cuenta el art. 5.1 Ley 35/1971 de 21 julio.

Artículo 115

Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo anterior las cantidades que se abonen a los particulares como indemnización por cambio forzoso de residencia, gastos de viaje por traslado familiar, transporte de ajuar y elementos de trabajo y jornales perdidos durante el tiempo invertido en los referidos traslados, de las que podrán disponer libremente los interesados, reintegrándose a los mismos el sobrante, si lo hubiere, de la cantidad retenida para amortización.

Artículo 116

Las familias que deseen ser trasladadas a fincas del Instituto podrán colocarse con el carácter de cultivadores provisionales en tanto se acuerde su instalación definitiva como colonos en cuyo momento, si no les convienen los lotes o parcelas que se les ofrezcan, podrán optar por percibir el importe íntegro de la expropiación de sus bienes, sin más obligaciones por parte del Instituto.

Artículo 117

En los casos en que sea necesaria la creación de nueva entidad local, conforme a lo previsto en el art. 95 Ley de Expropiación Forzosa, el Instituto quedará subrogado en los derechos de la entidad desaparecida o afectada por la expropiación, interviniendo en el expediente en su nombre y haciendo efectivas cuantas cantidades deban abonarse a ella por el expropiante, las cuales pasarán a formar parte del patrimonio de la nueva Entidad.

Artículo 118

La nueva entidad local se constituirá en la forma prevenida en el D 28 octubre 1955 o por las disposiciones que en los sucesivo puedan dictarse al respecto.

CAPÍTULO VI. DE LAS EXPROPIACIONES POR CAUSA DE COLONIZACIÓN Y DE OBRAS PÚBLICAS

SECCIÓN PRIMERA. De las expropiaciones por causa de colonización

Artículo 119

Las expropiaciones por causa de colonización y de fincas mejorables se regirán por su legislación especial y por las disposiciones reglamentarias dictadas en ejecución de aquella^[29].

SECCIÓN SEGUNDA. De las expropiaciones por causa de obras públicas

Artículo 120

Los Ingenieros jefes de los servicios respectivos de Obras Públicas asumirán las facultades a que se refiere el art. 98 de la ley.

CAPÍTULO VII. DE LA EXPROPIACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 123

1. Tratándose de las restantes modalidades de la propiedad industrial el Ministerio de Industria, previo informe de sus Organismos técnicos, podrá incoar el oportuno expediente de la expropiación forzosa en la forma y con los requisitos que se previenen en la ley y en este reglamento.

2. El acuerdo recaído se comunicará al Registro de la Propiedad Industrial, donde se efectuarán las inscripciones oportunas.

CAPÍTULO VIII. DE LA EXPROPIACIÓN POR RAZONES DE DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD DEL ESTADO

Artículo 124

Las expropiaciones y requisas que lleven a cabo las autoridades militares de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire, se regularán por el reglamento especial previsto en el art. 107 de la ley.

TÍTULO IV. INDEMNIZACIÓN POR OCUPACIONES TEMPORAL Y OTROS DAÑOS

cap.2 Derogada por dde.un RD 429/1993 de 26 marzo 1993

CAPÍTULO PRIMERO. INDEMNIZACIÓN POR OCUPACIÓN TEMPORAL

Artículo 125

La Administración, así como las personas o Entidades que se hubieren subrogado en sus derechos, sólo podrán ocupar, con carácter temporal, los terrenos propiedad del particular en los casos previstos en el art. 108 de la ley.

Artículo 126

[29] Véase el tít. V D 118/1973 de 12 enero.

1. Cuando haya de solicitarse, en virtud de lo previsto en el art. 110 núm. 1 de la ley, el permiso del particular con objeto de llevar a cabo, en terreno de su propiedad, estudios o practicar operaciones facultativas de corta duración, se hará constar al solicitarlo, la razón y fin de la ocupación, la duración de la misma y se designará el Perito de la Administración a efectos de la evaluación de los daños.

2. En el plazo de cuarenta y ocho horas el propietario requerido deberá conceder o denegar el permiso y, en caso afirmativo, designar en la misma contestación el perito encargado en su nombre de la evaluación de los daños.

3. Transcurridas las cuarenta y ocho horas sin que el propietario hubiere concedido expresamente el permiso, se dará cuenta al gobernador civil de la provincia o a la autoridad competente por razón del caso^[30], que resolverá sobre la necesidad de la ocupación.

4. En el supuesto de que otorgada la autorización se utilizaran los terrenos con fines distintos o se prolongara su ocupación por más tiempo del señalado, el particular podrá solicitar la intervención del gobernador civil^[31], el cual, previos los trámites que estime oportunos, estará facultado para retirar la autorización otorgada.

5. La responsabilidad a que se refiere el núm. 2 art. 110 de la ley se exigirá de acuerdo con el capítulo II del título IV de la misma y las disposiciones de este reglamento que lo desarrollan.

Artículo 127

Las ocupaciones temporales que traigan su causa de una declaración de utilidad pública o interés social y que resulten necesarias, por razón del fin de una expropiación, se regirán por las siguientes reglas:

1ª) El beneficiario de la expropiación vendrá obligado a formular una relación concreta e individualizada en la que se describan en todos los aspectos, material y jurídico, los terrenos cuya ocupación temporal se considere necesaria a los fines de la expropiación.

2ª) Recibida la relación señalada en la regla anterior el gobernador civil abrirá información pública durante un plazo de diez días^[32].

3ª) Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado, dicha relación habrá de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Provincia respectiva, y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, comunicándose, además, a los Ayuntamientos en cuyo término radique el terreno a ocupar para que la fije en el tablón de anuncios. A la inserción en el periódico de mayor circulación se aplicará la tarifa a que se refiere el art. 24.

4ª) Cualquiera persona podrá aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación temporal. En este caso, indicará los motivos por los que debe considerarse preferente la ocupación temporal de otros terrenos no comprendidos en la relación como más convenientes al fin de la ocupación.

5ª) A la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la información pública, el gobernador civil^[33], previas las comprobaciones que estime oportunas, resolverá con carácter ejecutivo acerca de las ocupaciones temporales precisas.

Artículo 128

La indemnización procedente por las ocupaciones temporales reguladas por el artículo anterior se regirá por las normas contenidas en los arts. 112 y siguientes de la ley. En el caso de que el particular discrepe de la Administración acerca de la posibilidad de evaluar de antemano la indemnización, deberá hacerlo constar así expresamente al rechazar la oferta que se le haga, y en el trámite previsto en el art. 113 de la ley deberá alegar ante el Jurado Provincial de Expropiación las razones por las que estime imposible la evaluación en ese momento. Dicho Jurado dará traslado al beneficiario del escrito del particular y en el plazo de diez días, evacuado o no el trámite de contestación por el mismo, resolverá acerca de la cuestión suscitada como previa. Decidido este punto, se estará, según los casos, a lo dispuesto en el art. 113 o en el 114 de la ley.

Artículo 129

En los casos en que el beneficiario, por considerar excesiva la tasación por ocupación temporal, decidiera recurrir a la expropiación, concurriendo el requisito de que la fijación del justo precio por los procedimientos previstos en la ley no exceda de una mitad de los daños y perjuicios causados, el particular afectado estará asistido de todos los derechos que la ley y este reglamento reconocen al titular expropiado.

Artículo 130

1. En los casos de las ocupaciones temporales previstas en el art. 116 de la ley, el beneficiario notificará al propietario la necesidad de la ocupación, haciendo constar las razones por las cuales se considera necesario el uso de materiales y productos.

2. En el plazo de cinco días, a partir de la notificación, podrá el propietario impugnar la necesidad de la ocupación ante el gobernador civil de la provincia^[34], el cual resolverá con carácter ejecutivo.

[30] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

[31] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

[32] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

[33] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

[34] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.

3. En el mismo plazo deberá acreditar el propietario la concurrencia de los requisitos señalados en el citado artículo de la ley para que haya lugar a indemnización.

4. Acreditados dichos requisitos se intentará por el beneficiario un convenio con el propietario acerca del importe de la indemnización, ofreciéndole en tal concepto la cantidad que se considere ajustada al caso y concediéndose al interesado el plazo de diez días para que conteste lisa y llanamente si acepta o rechaza la oferta.

5. En los casos en que el beneficiario estimara imposible evaluar de antemano la indemnización, o cuando el particular discrepara del mismo acerca de este extremo, se seguirán las reglas previstas en el art. 126.

Artículo 131

Las discrepancias que pudieran surgir entre el particular y la Administración en relación con las ocupaciones a que se refiere el art. 118 de la ley y con el aumento de los rendimientos económicos obtenidos como consecuencia de las obras realizadas por el beneficiario, serán resueltas por el gobernador civil de la provincia^[35], cuya resolución será recurrible ante el Jurado Provincial de Expropiación, en el plazo de quince días, a contar desde la notificación.

Artículo 132

La indemnización prevista en el art. 119 de la ley será evaluada mediante peritos designados por el beneficiario y el particular, elevándose en caso de discrepancias las respectivas tasaciones al Jurado Provincial de Expropiación.

TÍTULO V. GARANTÍAS JURISDICCIONALES

Artículo 139

Si la Administración pública intentare la expropiación con infracción de lo dispuesto en las leyes, el expropiado podrá utilizar, ante la jurisdicción correspondiente, las acciones previstas en el tít. V Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 140

1. El recurso contencioso-administrativo a que se refiere el art. 126 de la ley podrá ser interpuesto por el beneficiario o por cualquiera que hubiera sido parte en el expediente, y se regirá por las disposiciones generales sobre la jurisdicción y procedimiento contencioso-administrativo.

2. La demanda deberá fundarse en todo caso en alguno de los motivos siguientes:

a) Lesión, cuando la cantidad fijada como justo precio sea inferior o superior en más de una sexta parte al que en tal concepto se haya alegado por el demandante en el expediente de justiprecio.

b) Vicio sustancial de forma o violación, u omisión de los preceptos establecidos en la ley.

Artículo 141

De conformidad con lo dispuesto en el art. 128 de la ley, corresponderá a la jurisdicción Contencioso-administrativa el conocimiento de los recursos sobre indemnización de daños y perjuicios.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera

Quedan derogados el Reglamento de 13 de junio de 1879 y cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en este reglamento.

Disposición Final Segunda

El orden de prelación de fuentes establecido en el art. 2 de este reglamento para los supuestos a que se refiere, se aplicará igualmente a las expropiaciones reguladas por las disposiciones relacionadas en el art. 2. del Decreto de 23 de diciembre de 1955, que se entenderán en vigor a los solos efectos previstos en el apartado 1 del expresado artículo de este Reglamento.

[35] Téngase en cuenta la disp. adic. 4ª Ley 6/1997 de 14 abril.